



OBSERVATORIO

TIERRA, AGRONEGOCIO Y DERECHOS HUMANOS

REPORTE MARZO-ABRIL 2026

Violencia de civiles armados empeora situación de comunidades indígenas

Extractivismo: Paso Yobái y Canindeyú en el foco de conflictos

Desacelera pérdida de bosques tropicales, pero aumentan concesiones mineras en Amazonía

Peña promulga acuerdo SOFA y Paraguay participa en cumbre del “Escudo de las Américas”

Elvio Benítez en Emboscada, por exigir tierras narco para el campesinado

Nuevas promesas de titulación del INDERT, viejos cuestionamientos y trabas

NAVEGAR POR TEMAS **Tierra y desalojos** **Crisis climática** **Extractivismo**

Soberanía alimentaria **Acuerdo UE-MERCOSUR** **Semillas y biotecnología**

Morelos 1546 casi Lomas Valentinas, Asunción
<https://www.baseis.org.py/>
baseis@baseis.org.py
Fb: baseispy | X: baseispy
Ig: baseisparaguay | Yt: baseinvestigaciones1
Con el apoyo de Misereor y CCFD

BASE
Investigaciones
Sociales



Observatorio Tierra, Agronegocio y Derechos Humanos, Marzo-Abril 2026

Contenido: Lis García, Abel Irala

Edición y diagramación: Diego Segovia

Corrección: Margarita Palau

Con el apoyo de CCFD y MISEREOR

Mayo 2026

CONTACTO PARA ENVIAR INFORMACIÓN - baseis@baseis.org.py

**Tierra y desalojos | Crisis climática | Soberanía Alimentaria
Extractivismo | Acuerdo UE-Mercosur | Semillas y biotecnología**

EDITORIAL

Los sucesos analizados entre marzo y abril de 2026 revela el despliegue de una dinámica con tres elementos estructurales que configuran la coyuntura presente: militarización, extractivismo y finanzas. A nivel nacional, se observa el desarrollo del control territorial a través de la militarización de la Región Oriental, profundizado por el alineamiento del gobierno de Santiago Peña con los intereses de Estados Unidos, a través del Acuerdo SOFA. Este fenómeno se inscribe en una renovada agresión imperialista que, bajo los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional corolario Trump, instrumentaliza la seguridad para blindar la expansión del capital.

El avance del extractivismo y su contracara, la superexplotación del trabajo, operan a través del ejercicio del poder financiero, que ha convertido a la tierra y los ecosistemas en mercancías financieras. Esta dinámica del capital se manifiesta además en la imposición de insumos tecnológicos, la privatización de bienes comunes y un ciclo de endeudamiento que asfixia tanto las arcas públicas como a las poblaciones previamente precarizadas. Se observa que el régimen global intenta subordinar la energía, el agua, los minerales y la producción de alimentos a fines estrictamente acumulativos. Este modelo utiliza los territorios y las poblaciones para usos diametralmente opuestos a las necesidades de la reproducción social de la vida en su conjunto.

Las noticias recopiladas muestran un país atravesado por tensiones estructurales. Las disputas por la soberanía y la tierra se intensifican en un escenario donde comunidades indígenas y campesinas enfrentan la violencia de una reconfiguración de las políticas de seguridad al servicio de la consolidación de nuevos mecanismos de acumulación por desposesión. Por ejemplo, los mercados de crédito carbono y la extensión extractivista bajo la fachada de “sostenibilidad” para el comercio internacional. Las comunidades campesinas e indígenas tales como el pueblo Enxet, el Angaité o el Pai Tavytera resisten el aislamiento frente a las consecuencias de la crisis ecológica y la desidia estatal, evidenciando que el desarrollo propuesto implica, en realidad, un renovado mecanismo de control, mercantilización y exclusión territorial al que se suman dinámicas de captura digital y genética de la biodiversidad paraguaya y el extractivismo de datos o biopiratería.

Como respuesta a las expresiones críticas de la emergencia climática y ecológica que se vive en el país, el gobierno y organismos internacionales, impulsan la mercantilización de la naturaleza. Este proceso profundiza el modelo extractivista con renovados modelos de negocio que dinamizan nuevas modalidades de acumulación por desposesión, de la mano de una nueva etapa de colonización disfrazada de “verde” a partir de los llamados “incentivos” para la inversión extranjera directa a negocios supuestamente “sostenibles” en casos tales como el de las plantaciones forestales en torno a Paracel, o la instalación de empresas electrointensivas para la producción de agrocombustibles.

TIERRA Y DESALOJOS

Conflictos sociales arrecian en Paso Yobái y Canindeyú

Denuncias contra actividades extractivas y agroganaderas se dieron con particular énfasis en Paso Yobái y Canindeyú, donde comunidades rurales acusaron a empresas mineras y actores armados de destruir caminos, contaminar recursos hídricos y ejercer violencia para desplazar familias campesinas. Pobladores denunciaron falta de protección estatal y complicidad institucional frente a estos conflictos.

En Paso Yobái, departamento del Guairá, los pobladores de la comunidad de Colonia Sudetraí se encuentran en estado de alerta ante excavaciones mineras para la extracción de oro que amenazan con destruir su única vía de acceso. Denuncian la aparición de fisuras que pone en riesgo su conectividad y les expone al aislamiento, por lo que exigen la intervención municipal para suspender las obras y establecer una mesa de diálogo que priorice la seguridad territorial y el derecho al libre tránsito por sobre la actividad extractiva.

El ingeniero Rubén Irala, defensor de derechos humanos y coordinador de la Pastoral Social Diocesana del Guairá, sufrió un ataque armado el 20 de marzo en el Asentamiento 23 de Diciembre, departamento de Caazapá. En vista de las amenazas previas que había recibido, Amnistía Internacional señala que es muy probable que esta agresión esté vinculada a su trabajo de protección del medioambiente y de las comunidades afectadas por la degradación ambiental especialmente en Paso Yobái.

Movilización de la Unidad Campesina

Las organizaciones campesinas e indígenas aglutinadas en el espacio de unidad campesina, indígena y popular realizaron movilizaciones nacionales en defensa de la tierra, la soberanía y la producción agrícola. Las protestas denunciaron desalojos, criminalización de dirigentes sociales y una estructura agraria profundamente desigual, en la que una pequeña minoría concentra la mayor parte de la tierra productiva.

Elvio Benítez a Emboscada, por exigir tierras narco para el campesinado

El 28 de abril el dirigente campesino Elvio Benítez se entregó a la policía en Santa Rosa del Aguaray. Fue posteriormente trasladado a la cárcel de Emboscada. Esto sucede luego del intento de ocupación de las tierras confiscadas por SENABICO al narcotraficante Cabeza Branca. La propuesta que organizaciones campesinas encabezadas por Elvio vienen trabajando hace 5 años es que los inmuebles incautados del narcotráfico puedan destinarse a la Reforma Agraria. Actores del Estado y terratenientes esperan que las mismas se rematen al mejor postor. El traslado de Benítez a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada posee una particular relevancia, considerando que, meses antes, el mismo había denunciado formalmente un plan para asesinarlo. Cabe recordar que, en audios filtrados en 2025, entre la ex presidenta del INDERT, Gail González, y el Diputado Lalo Gómez (asesinado por las fuerzas policiales en el marco de un operativo anti narcotráfico), ambos mencionaban explícitamente a Elvio y su hermano Ernesto.

Violencia de civiles armados empeora situación de comunidades indígenas

Diversas comunidades indígenas —como Tekoha Karapá, Tooshe Qaltaq y Tekoha Sauce— denunciaron abandono estatal, pobreza extrema y falta de acceso a tierras y servicios básicos, además de constantes amenazas por parte de grupos armados vinculados a intereses empresariales. En varios casos, las comunidades reportaron ataques violentos, quema de viviendas, persecuciones y desplazamientos forzados, mientras reclaman reconocimiento territorial y reparación histórica.

Tekoha Karapá, (Canindeyú)

Una de las comunidades que sufre ataques de manera sistemática es Tekoha Karapá. Entre marzo y abril volvió a encontrarse en estado de alerta máxima, luego de que civiles armados al servicio de extranjeros, amenazaran con atropellar sus derechos: sus pobladores han perdido cultivos, materiales de trabajo y animales, y sus viviendas han sido quemadas en varias ocasiones. El Estado no ha dado respuesta.

Tooshe Qaltaq, (Presidente Hayes)

La comunidad indígena Tooshe Qaltaq, del Pueblo Qom, denunció ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) la situación crítica que enfrentan las familias asentadas en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el distrito de General Bruguez. La causa es el avance del Programa de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa – General Bruguez, una obra de gran envergadura que contempla la ampliación del derecho de vía —de entre 25 y 50 metros de ancho según el sector—, la construcción de nuevos puentes, drenajes y pasos de fauna, entre otras mejoras. Dichas obras amenazan con desalojar a familias que ya habitan sin acceso a derechos básicos como educación, salud y vivienda adecuada.

Tekoha Sauce, (Alto Paraná)

Miembros del Pueblo Avá Guaraní de Tekoha Sauce se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Asunción para exigir reparación por el daño histórico causado por la construcción de la hidroeléctrica Itaipú. La comunidad lleva años reclamando la devolución de sus tierras y la compensación por las pérdidas sufridas a raíz de la construcción de la represa, que ha provocado un impacto devastador en su modo de vida y en su cultura.

Guayaki kua, (Caaguazú)

El 6 de marzo, la Policía Nacional retuvo en la Comisaría 15 de Asunción a 18 personas provenientes de la comunidad indígena Guayaki kua, de Caaguazú, que habían llegado a la capital para reclamar por el servicio de agua potable. El grupo pretendía marchar desde la Terminal de Buses hasta la Plaza Italia.

Nuevas promesas de titulación de tierras del INDERT

El Gobierno, a través del INDERT impulsa una intensa campaña de titulación masiva de tierras, presentada como una política histórica de regularización y acceso a la propiedad para familias campesinas y mujeres rurales. Se anunciaron proyectos de ley destinados a facilitar la titulación, eliminando barreras económicas y ampliando los plazos de pago, al tiempo que destacaron acuerdos para resolver conflictos emblemáticos en colonias campesinas. Sin embargo, también surgieron críticas internas y denuncias sobre irregularidades administrativas, debilitamiento institucional y manipulación de cifras dentro del ente agrario. Se anunció un proyecto de ley que propone la entrega inicial del título de propiedad, el acceso a créditos agrícolas y la extensión a 12 meses del plazo para el pago inicial y el pago final. El proyecto apunta a entregar 50.000 títulos.

El caso Araújo kue, emblema de la propaganda

Un caso emblemático de la propaganda estatal sobre la regularización de títulos

es el de Araújo kue, distrito de Curuguaty, Canindeyú. El medio oficialista La Nación y el INDERT, publican:

“INDERT otorga titulación masiva en Araújo Cué, tras casi 40 años de lucha” — La Nación, 31 de marzo de 2026.

“Van culminando los trabajos técnicos en Araújo Cué, Curuguaty, Canindeyú, para la titulación masiva de las tierras” —publicado por el INDERT en su cuenta de Facebook cuarenta días después.

Ambos titulares son más propagandísticos que reales. En las publicaciones no se informa sobre ninguna entrega efectiva de títulos. Hasta ese momento no se había entregado nada, pues solo se había iniciado el proceso de titulación, que consta de varias etapas. Si el inmueble de la colonia se encuentra en regla y los beneficiarios cuentan con los recursos para pagar el porcentaje estipulado del precio de sus lotes, podrán recibir sus títulos. No obstante, si surgiera algún problema jurídico —error en el plano, superposición de mensuras, reclamo de herederos, falta de pago por compra o expropiación—, los/as campesinos/as quedarán sin posibilidades de obtener la titulación esperada.

Se promulga acuerdo SOFA y Paraguay entra al “Escudo de las Américas”

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), con posturas marcadamente divididas entre legisladores oficialistas y opositores. Con esta aprobación, el proyecto —que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores— pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el acuerdo SOFA desde Chile —donde asistió a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente—, junto al Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau. El acuerdo regula la presencia de personal militar estadounidense en el territorio paraguayo.

En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores participó de la "Conferencia Inaugural de las Américas para la Lucha contra los Cártels y Grupos Criminales", celebrada los días 4 y 5 de marzo en el estado de Florida, evento al que siguió la cumbre denominada "Escudo de las Américas".

Dos meses, dos imágenes



Movilización de comunidades indígenas en Yby Yaú, Concepción.



Feria agroecológica organizada por la Pastoral Social de Encarnación.

CRISIS CLIMÁTICA

Desacelera pérdida de bosques tropicales, pero aumentan concesiones mineras

A nivel global, se reportó una caída del 36% en la pérdida de bosques tropicales primarios en 2025, impulsada principalmente por la gestión ambiental en Brasil (reducción del 42%), Colombia e Indonesia. Este dato, que representa un avance en materia de respuesta a la crisis ecológica, especialmente bajo gobiernos progresistas, convive con contradicciones, como la concesión estatal a por menos 215 mineras sobre cinco ríos y territorios indígenas de la Amazonía.

El ritmo del calentamiento global - duplicado - arriesga superar los límites del Acuerdo de París antes de 2030, y empuja a los sistemas alimentarios mundiales a crisis sin precedentes. De acuerdo a un informe de la ONU, como consecuencia se está dando un incremento de la mortalidad del ganado y de las dificultades del trabajo agrícola.

Fenómenos climáticos extremos

Durante los meses analizados se han reportado graves inundaciones que han provocado el aislamiento de comunidades. En el Chaco, comunidades de **Bahía Negra** quedaron nuevamente aisladas debido a que los caminos reparados precariamente no resistieron las lluvias. En Presidente Hayes, la comunidad del **Pueblo Enxet** enfrenta una emergencia humanitaria por inundaciones y la falta de caminos públicos, dependiendo de la voluntad de ganaderos vecinos para transitar por propiedades privadas. Pobladores del **Pueblo Angaité** denunciaron que estudiantes deben asistir a clases caminando entre el agua debido al aislamiento total de la zona tras las lluvias.

En la zona de **Teniente Esteban Martínez** de Alto Paraguay, decenas de camiones de gran porte (entre 45 y 74 vehículos) quedaron atrapados en el lodo, evidenciando la fragilidad de las rutas regionales.

Se reportó además una desidia patronal:

seis trabajadores de la **comunidad Saría** fueron abandonados por sus empleadores en una zona aislada del Chaco, obligándolos a caminar 180 km sin recursos para regresar.

La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) urgió al INDI y a la SEN la declaración de emergencia para movilizar asistencia aérea y terrestre, ante la falta de alimentos, agua potable y el aumento de enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, fuertes temporales causaron inundaciones en barrios de Central (**Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby**).

En este escenario, incluso el gremio de la construcción (CAPACO) señaló que Paraguay tiene un déficit de USD 30.000 millones en infraestructura, lo que provoca la parálisis del país ante cada tormenta. Mientras tanto, Peña ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para limpiar ciudades tras las intensas lluvias.

Avance de políticas ambientales vinculadas a los mercados de carbono

Peña participó de la COP15 con una narrativa que busca reconciliar la expansión del modelo extractivista con las exigencias de la agenda ambiental global. En la Conferencia afirmó que la protección ambiental está “directamente vinculada al desarrollo” dando énfasis al supuesto cuidado del Chaco y el Pantanal que enfrentan las mayores tasas de deforestación de la región. Hizo hincapié en la promoción de corredores ecológicos - y proyectos como PaCha- enmarcados en la estrategia de ubicar a Paraguay como un “hub” de mercados de carbono. Peña participó en una reunión con empresarios brasileños de la Federación de Industrias de Mato Grosso Sul (FIEMS), junto al ministro de relaciones exteriores y el del ambiente y desarrollo sostenible. A su regreso, participó del “Paraguay Carbon Forum 2026”, donde se insistió en Paraguay como “sumidero de carbono”.

OTRAS ACCIONES

El gobierno avanzó en un **memorándum de entendimiento ante el interés de empresas taiwanesas** en adquirir créditos de carbono paraguayos.

Técnicos del **MADES** realizaron inspecciones in situ en bosques del Chaco para **certificar nuevas áreas bajo el régimen de servicios ambientales**.

El Consejo Indígena de la Región del Chaco, participó de unos **talleres organizados por el MADES y el PNUMA**, sobre proyectos comunitarios con enfoque territorial y de derechos. Como resultado se creó en una guía metodológica adaptada a los contextos indígenas para facilitar la vinculación de los proyectos con financiamientos.

En el marco del proyecto **Paraguay + Verde**, se certificaron más de 145.000 hectáreas de territorios indígenas.

Se aprobaron los Planes Operativos Anuales (POA) 2026 para las plataformas de desarrollo sostenible en Itapúa y Alto Paraná, enfocándose en criterios ambientales para sectores como el porcino y el forestal. Se lanzó el **Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (RETSA)** como herra-

mienta estratégica para blindar la producción ante mercados internacionales. El RETSA busca integrar criterios ambientales en las cadenas de valor para mejorar la competitividad de las materias primas paraguayas.

La Cámara de Diputados declaró de interés nacional **campañas de concienciación y reforestación como “Paraguay Planta”**.

Mientras, el pueblo Paĩ Tavyterã denunció un “ecocidio” en el territorio ancestral Yvy Pyte, cerca del sitio sagrado Jasuka Venda. La tala ilegal afectó el entorno de una escuela local. El IICA lidera diálogos sobre bioinsumos, mientras que FECOPROD e INFONA trabajan en sistemas de **monitoreo forestal** para cumplir con los compromisos climáticos delineados por el gobierno.

Se creó la **Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono (CAPA-DECO)** para fortalecer este mercado en el país. El MADES también coordina con el Global Green Growth Institute (GGGI) para atraer inversiones verdes.

La ministra de Singapur, Grace Fu visitó proyectos de carbono en suelos en el Chaco (como el de la empresa Boomitra) y mantuvo ruedas de negocios con firmas locales para fortalecer la cooperación climática y el mercado de créditos de carbono.

A NIVEL INTERNACIONAL

El IFC anunció apoyo para el primer **bono de biodiversidad en Ecuador**, buscando canalizar capital privado hacia proyectos de conservación. La CFI y el Banco Santander destinaron USD 250 millones para el programa Eco Invest en Brasil, buscando atraer inversores extranjeros para la transición hacia uno, lo que se denomina como una “economía resiliente”.

El proyecto GANASUR avanza en la caracterización de sistemas ganaderos en el Cono Sur para desarrollar estrategias que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Informes internacionales advierten que las soluciones técnicas para reducir el metano ganadero son insuficientes sin una reforma sistémica, dado que el crecimiento de la producción supera los supuestos beneficios climáticos.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Informes arrojan inflación cero

A nivel nacional, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, registró una inflación del 0%, según el Banco Central del Paraguay. En el tradicional Mercado 4 de Asunción, comerciantes y trabajadores coinciden en que los precios de varios productos se han mantenido estables, aunque advierten una caída en las ventas y cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

Lucha contra el contrabando

En el marco de la reunión mensual de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Combate al Contrabando del Senado, legisladores y productores frutihortícolas debatieron sobre la lucha contra el contrabando, los canales de comercialización y otros temas del sector. Respecto al tomate, se anunció que entre mayo y julio habrá una alta producción nacional, lo que permitiría una baja en los precios, siempre que se garantice un mayor control del contrabando. “Tenemos que darles las garantías a los productores de que van a poder colocar su producto en el mercado, y que no inunden con contrabando el mercado de nuevo. De lo contrario, habrá abundancia, pero no podrán vender”, señaló el senador Oviedo. El legislador también señaló que existen falencias estructurales en cuanto a la producción constante de tomate en el país. Asimismo, anunció que el proyecto de Seguro Agrícola —que sufrió reveses por falta de financiación— se intentará impulsar este año a través del Crédito Agrícola de Habilidad:

Nunca pudimos cumplir con los productores. Ahora vamos a hacer un nuevo intento”. Oviedo destacó además el rol de intermediación de la comisión: “Es muy provechoso lo que hacemos. Una acción inmediatamente impacta en el mercado, ya sea sobre la disponibilidad del producto o sobre su precio”. En ese contexto, el precio del tomate en el Mercado de Abasto registra una nueva suba en medio de la escasez. Comerciantes denuncian la ausencia de un plan gubernamental para el abastecimiento regular del mercado, señalando que los más perjudicados son los consumidores, quienes no encuentran el producto o deben pagar precios muy elevados cuando lo hallan.

Iniciativas de comercialización de organizaciones

Iniciativas como la **Feria Agroecológica de la Pastoral Social de la Diócesis de Encarnación** representan una alternativa concreta de acceso a alimentos sanos. Desarrollada cada viernes en la capital de Itapúa, la feria reúne a productores de comunidades parroquiales de distritos como Nueva Alborada, Cambyretá y San Pedro del Paraná. Ofrece productos sin agroquímicos —derivados del trigo, girasol, aceites, hortalizas, yerba y miel agroecológica—, así como elaborados como empanadas y pan dulce, que llegan directamente al consumidor sin intermediarios. Desde el asentamiento **San Miguel, en Colonia Toryvete**, familias de la FNC trasladaron sus productos a Ciudad del Este: mandioca, maíz, queso Paraguay, miel, hortalizas y más. Detrás de cada producto hay trabajo, organización y lucha. A pesar del abandono del Estado, la falta de regularización de tierras y la amenaza permanente de desalojo, estas familias siguen produciendo alimentos para el país. Su persistencia confirma una verdad fundamental: el campesinado produce, el campesinado alimenta, el campesinado sostiene al Paraguay, afirmaron desde la FNC.

Acciones del gobierno

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección de Género y Juventud Rural, la Dirección de Cooperación Técnica y la Dirección de Extensión Agraria, en articulación con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la GIZ, impulsa una iniciativa orientada a **fortalecer la agricultura familiar y promover la inclusión financiera de jóvenes y mujeres rurales**, en el marco del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones.

En una primera etapa, la iniciativa llegó a los departamentos de Canindeyú y San Pedro, con asistencia a productores indígenas del distrito de Yhovy. Los talleres se desarrollaron en: Comité de Mujeres Productoras San Roque González, Comunidad Indígena Yhovy, Comité de Mujeres Kuña Guapa, Comité de Mujeres Santa Luisa, Asociación de Productores Santa Rosa, Comité de Mujeres Naranja Guy, Comité de Productores Santa Rosa y Comité de Mujeres Unidas 3 de Noviembre. En total, se capacitaron 295 personas. Los talleres incluyeron la socialización de la Ley 5446/15 de Políticas de Mujeres Rurales, orientaciones sobre la formalización de la agricultura familiar, gestión comercial, marketing y valor agregado, además de temas como educación financiera, acceso a servicios financieros y bancarización para productores feriantes de la agricultura familiar. En esa misma línea, el MAG, a través de la Dirección de Género y Juventud Rural y la Dirección de Educación Agraria, en articulación con la Federación de Escuelas Agrícolas y Centros de Capacitación Privados del Paraguay (FECAP) y el BNF, continúa impulsando talleres de educación financiera dirigidos a jóvenes rurales. Se desarrolló una jornada en el Instituto Agropecuario Carlos Pfannl, **centrada en el manejo del dinero, el uso de herramientas financieras y el fomento del ahorro**, en el marco del programa "Mi Primer Banco" del BNF.

El énfasis especial en el proceso de financierización y bancarización de las políticas gubernamentales es característico de los últimos tiempos. Es decir, lo que se busca es incluir a familias campesinas al mercado financiero, mientras que se deja de lado problemas reales que se refieren a la falta de tierra, mercados, caminos. Incorporar a familias campesinas al sistema financiero formal, sin garantías de precios justos ni mercados estables, puede traducirse en deudas que agravan su vulnerabilidad.

Comunidades en éxodo

La brecha entre la política pública y la experiencia concreta es elocuente. Benicia Chávez, dirigente de la Juventud Paraguay Pyahurã, lo expresa con claridad: "Hace un mes, más de 90 jóvenes salieron del Asentamiento **Crescencio González**, en San Pedro. Se van a Brasil, España, Argentina, porque para ellos no hay más qué hacer. Siembran en los terrenos de sus padres y no venden sus productos. Dieron todo de sí y no venden, no tienen mercado, no tienen precio para su producto." A esto se suma una dimensión que pocas veces aparece en los documentos oficiales: el impacto en la salud mental. La frustración de producir sin poder vender, de invertir esfuerzo sin obtener retorno, es también una forma de violencia estructural que el Estado no registra ni atiende.

La migración juvenil no es una decisión libre. Es la consecuencia de un modelo que abandona al campesinado y luego le ofrece herramientas financieras como sustituto de lo que realmente necesita.

Comunidades Ayoreo: procesados por reclamar víveres de la SEN

Defender el derecho a la alimentación se ha convertido, también, en motivo de persecución judicial. Los Líderes Ayoreo enfrentan un proceso penal derivado de un episodio ocurrido en 2024, cuando, en el contexto de una emergencia ambiental y sanitaria, protestaron porque la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) intentó entregarles menos kits alimentarios de los que les correspondían. Si bien la imputación inicial fue desestimada, un comunicado de marzo denunció la reapertura del proceso penal contra tres integrantes de la comunidad, configurando un claro patrón de criminalización del liderazgo indígena en el Chaco.

Represión a cañicultores de Troche, Guairá

Los cañicultores del distrito de Mauricio José Troche se movilizaron para exigir el cumplimiento del compromiso estatal de finalizar el nuevo tren de molienda de la planta alcohólica de Petropar, denunciando reiterados incumplimientos de acuerdos firmados. La protesta fue reprimida con dureza por la Policía Nacional, que empleó carros hidrantes, balines de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes. El saldo fue de al menos 10 heridos —entre ellos una persona de la tercera edad que recibió un disparo de balín en el ojo y quedó en estado grave—, 11 detenidos y 19 tractores incautados. Uno de los aprehendidos denunció haber sido víctima de torturas y golpes durante su detención, tras negarse a abandonar su tractor. Su familia exigió la devolución de los implementos requisados.

Ante la tensión generada, la ciudadanía de Troche se autoconvocó y se sumó a las protestas en un acto de solidaridad, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, el Juzgado Penal de Garantía del 2.º Turno de Villarrica, mediante resolución

Al N.º 89 del 12 de marzo de 2026, dispuso la liberación de los 11 detenidos, quienes continuarán el proceso en libertad. El presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su renuncia en medio de la crisis, siendo reemplazado por William Wilka.

Como desenlace provisional, Petropar acordó adquirir el 100% de la producción de la zafra 2026, medida calificada por los propios actores como un mero “parche”, condicionado al levantamiento de las medidas de fuerza. El Gobierno se limitó a anunciar la conformación de una mesa de trabajo para abordar la demanda central del sector: la concreción del nuevo tren de molienda, proyecto largamente postergado, que permanece sin resolución concreta y continúa siendo el núcleo del conflicto.

Impacto de la guerra: dependencia fósil y aumento de los precios de los alimentos

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio comienzan a tener repercusiones directas en la economía agrícola mundial. El encarecimiento de insumos estratégicos —como combustibles y fertilizantes— ya se refleja en mayores costos para el sector productivo y abre la posibilidad de un aumento gradual en los precios de los alimentos, tendencia que también podría sentirse en Sudamérica. Según un informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la volatilidad en los mercados energéticos y de insumos agrícolas está elevando el costo de los medios de producción, generando preocupación por posibles restricciones en el suministro o interrupciones logísticas de fertilizantes y materias primas vinculadas.

El alza en los precios de los combustibles ejerce presión sobre los costos de producción y logística. Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se espera que los precios de la canasta básica se mantengan estables, sin un efecto inmediato sobre los consumidores.

A nivel global, el Banco Mundial prevé que este año los precios de los productos básicos aumentarán un 16%, impulsando la inflación y desacelerando el crecimiento económico como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. En materia de alimentos, se proyecta un incremento del 11% en el precio de la carne vacuna, debido a la reducción en los suministros de ganado. Los precios del aceite de palma y de soja subirán un 8% en 2026, impulsados por la alta cotización del petróleo, que aumenta la demanda de biocombustibles. Por su parte, el trigo y el maíz registrarán incrementos del 4%, atribuibles al aumento de los costos de insumos y logística.

Movilizaciones campesinas e indígenas

En el mes de marzo La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) manifestó su preocupación por la falta de avances en los planteamientos presentados a diversas instituciones del Estado, referidos al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y a reclamos históricos del sector. La organización exigió la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional y advirtió que, de no obtener respuesta, convocará movilizaciones en Asunción.

La CNI, en conferencia de prensa en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) informó sobre el estancamiento de sus demandas y anunciaron posibles medidas de presión. Delegados/as de distintas organizaciones campesinas nacionales y departamentales participaron del encuentro. Según explicaron, pese a los compromisos asumidos en reuniones anteriores con autoridades gubernamentales, no se registraron avances ni respuestas concretas a las solicitudes presentadas.

La Federación Nacional Campesina (FNC), que desde hace más de 30 años lleva los reclamos del campo a Asunción a través de su tradicional marcha multitudinaria, informó que la convocatoria esperada para marzo de este año no tendrá lugar. Señalaron que, si bien las marchas permitieron alcanzar conquistas importantes y que siguen siendo una herramienta histórica de lucha, se continuarán realizando en ocasiones posteriores como parte de la lucha del campesinado en los momentos que así lo definan colectivamente.

Entre el 20 y el 22 de abril, integrantes del Espacio de Unidad Indígena, Campesina y Popular se movilizaron en Asunción y en distintos departamentos del país para denunciar la profunda crisis de soberanía territorial, económica y alimentaria que atraviesa el sector.

Los manifestantes señalaron que un alto porcentaje de comunidades campesinas e indígenas carece de tierras propias, y que más de 1.400 familias campesinas fueron desalojadas en los últimos meses. Exigieron la regularización de tierras de la Reforma Agraria —actualmente ocupadas en un 40% por personas ajenas al sector— y la derogación del acuerdo militar SOFA con Estados Unidos, al que calificaron como una cesión de la soberanía nacional.

20 de marzo — San Ignacio, Misiones

Integrantes de la Organización Campesina de Misiones se movilizaron nuevamente con el cierre de la ruta PY01, a la altura del kilómetro 234, en respuesta al incumplimiento del acuerdo asumido por el Gobierno Nacional a través de la Entidad Binacional Yacypretá, que contemplaba el desembolso del último 20% para el pago de preparación de suelo. También exigieron la entrega de kits de víveres. La medida de fuerza fue levantada parcialmente luego de que el gobernador Richard Ramírez comunicara la aprobación del desembolso pendiente para los distintos proyectos productivos.

23 de marzo — Capiibary, San Pedro

Pobladores de varias comunidades del distrito de Capiibary, principalmente de la comunidad de Jahape, se movilizaron con cierres intermitentes de rutas en el Cruce Santo Domingo. Integrantes de la Coordinadora de Desarrollo Social de Capiibary —de la cual forma parte la Organización de Lucha por la Tierra (OLT)— acompañaron la iniciativa para denunciar el abandono de las comunidades campesinas por parte del gobierno de Santiago Peña, reclamando atención a problemas de infraestructura básica: mejoramiento de la red vial, de los servicios de salud, del sistema eléctrico, entre otros.

EXTRACTIVISMO

Los rubros del extractivismo se encuentran con los impactos de la guerra en Irán. Se reportan subas del 50% en fertilizantes y 20% en fletes internacionales, agravados por la decisión de China y Rusia de restringir exportaciones de insumos. La UGP advirtió sobre un comportamiento atípico de los precios. Mientras Chicago incrementa los precios, a nivel local el mercado no reacciona proporcionalmente.

La ganadería en la turbulencia de mercados

El sector ganadero ha reportado impactos a la rentabilidad del sector primario frente a la **caída del dólar**. El aumento en el precio de los combustibles y la logística internacional (agravada por tensiones geopolíticas) reduce los márgenes de ganancia. En este sentido, el Frigorífico Concepción atribuyó la baja en su calificación de riesgo (Moody's) a la incertidumbre global y costos logísticos, esperando una reversión en mayo.

A esto se suma el impacto del cambio climático. Tormentas y demoras en barcazas han generado problemas logísticos en los puertos de Mariano Roque Alonso y Limpio. Frente a ello, expertos prevén un 75% a 80% de probabilidad de un escenario con más lluvias y calor para el segundo semestre, lo cual podría favorecer la producción de pasto, pero disminuir la oferta y, con ello, afectar los precios de la carne para el consumidor final para inicios del segundo semestre del año. El sector ganadero enfrenta una menor disponibilidad de hacienda comparado con 2025. En relación con el volumen de Faena, se reporta que en febrero se registraron 159.572 cabezas, un aumento del 21% respecto a enero, pero un 22% por debajo de febrero de 2025. Esto genera una caída estructural en la producción de terneros que impactará la oferta de los próximos años.

El gobierno activó esquemas de subsidios a este sector. Se oficializó la emisión de **bonos por G. 40.000 millones** (aprox. USD 6 millones) para financiar la retención de vientres, orientados a pequeños y medianos productores. Además, el MIC y la ARP coordinan ajustes en los sistemas de trazabilidad para cumplir con las normativas ambientales y sanitarias de la Unión Europea. **El MAG lanzó la Encuesta Agropecuaria Chaco 2026** para censar a 1.500 productores y actualizar datos de carga animal y preñez. Mientras tanto, SENACSA afirma que, técnicamente, la vacunación contra la aftosa es "innecesaria" debido al riesgo insignificante en la región, aunque se mantiene el monitoreo. En Alto Paraguay, la inmunización alcanzó el 50% del hato (1,8 millones de cabezas).

En el mismo sentido, el gobierno buscó **diversificar los destinos de la carne** ante la volatilidad de los precios internacionales y costos logísticos. Con Bolivia se acordó un esquema de reciprocidad sanitaria para la exportación e importación de carne bovina y porcina. Por otra parte, Canadá desplazó a Brasil del Top 5 de destinos, reflejando una mejora en el acceso a mercados de alta exigencia (EE. UU. y Canadá). La firma Hilton Foods Solutions del Reino Unido manifestó interés en aumentar la compra de carne vacuna y evalúa incorporar la carne ovina para guaya al mercado británico. En este escenario además, consultoras han destacado el potencial de ahorro en tecnología agrícola (hasta 3 veces más barata que la brasileña) si se logra un acceso directo a proveedores chinos.

Nuevas habilitaciones para exportación de carne porcina

Mientras tanto, el sector porcino obtuvo la habilitación de los frigoríficos Upisa y Pirayú para exportar carne y menudencias a Argentina, tras superar auditorías técnicas a finales de 2025.

El complejo sojero avanzó 50mil hectáreas

La zafra sojera 2025/26 cubrió 3.683.148 hectáreas en la Región Oriental, un incremento de casi 50.000 ha respecto al ciclo anterior. Alto Paraná lidera en superficie (946.011 ha), aunque los mayores aumentos se observaron en el norte (Canindeyú, Amambay y San Pedro). Mientras tanto, el área de siembra de maíz sufrió una caída significativa, de 16.099 hectáreas, retrocediendo a niveles de 2022 debido a precios bajos y altos costos de insumos.

El complejo sojero generó US 1.440 millones al cierre de marzo, mientras tanto tiene una baja contribución al Estado. Los envíos de oleaginosas crecieron un 56% (2,85 millones de toneladas) y los cereales un 83% (1,08 millones de toneladas). El algodón destacó con un salto del 228%.

Las ferias Expo Regional Canindeyú e Innovar 2026 (con más de 300 expositores) funcionaron como plataformas para consolidar vínculos con entidades como Sudameris y promover la tecnología transgénica y nuevos bioinsumos que privatizan microorganismos. El interés de empresas que cotizan en Nasdaq y la asamblea del BID refuerzan la imagen de Paraguay como destino de inversiones para proyectos extractivistas. En este marco, se promueve la "agricultura inteligente" mediante el uso de IA y automatización para la toma de decisiones basada en datos reales.

Mientras que el sector hace una campaña en relación con una supuesta mayor demanda de mano de obra calificada y una creciente presencia de mujeres en cargos estratégicos; se volvió a reportar el fallecimiento de un obrero en un silo de Yguazú.

Revés para el sector arrocero

El sector arrocero da señal de atravesar un ciclo de reajuste forzado con una caída significativa en el área cultivada. Según el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio),

la superficie de arroz con riego para la zafra 2025/2026 alcanzó 208.949 hectáreas, lo que representa una pérdida de 57.377 hectáreas frente al ciclo anterior, es decir, una reducción del 20%.

De acuerdo a los representantes del sector, esta disminución se atribuye a una combinación de precios bajos en el mercado internacional, costos de producción rígidos y condiciones climáticas atípicas (bajas temperaturas entre septiembre y octubre) que retrasaron el inicio de la campaña. Paraguarí registró la mayor contracción porcentual, con una disminución cercana al 48% (16.003 ha), por su parte, si bien Misiones se mantiene como el líder productivo con 51.008 ha, sufrió una caída del 38% respecto al año pasado. Itapúa se presenta como la excepción positiva, con un crecimiento del 14% (21.905 ha), aunque este repunte no alcanza para compensar la caída a nivel nacional.

Los productores han optado por "ajustarse los cinturones", priorizando la eficiencia en las hectáreas sembradas y postergando nuevas inversiones hasta que el escenario de precios y clima muestre mayor previsibilidad. Empresas como Molinos El País destacan que la clave para enfrentar la coyuntura actual es la revalorización de la producción mediante la industrialización.

Apuestas al sector forestal

El sector forestal paraguayo busca trascender la exportación de materia prima para posicionarse junto al agro y la ganadería como motor económico. La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) propuso una agenda basada en la industrialización, seguridad jurídica y financiamiento a largo plazo para **productos de mayor valor agregado**.

La madera contrachapada alcanzó cifras históricas en febrero de 2026, con 3.156 toneladas por USD 2,49 millones, consolidándose como el principal producto industrializado del sector. El carbón vegetal se mantiene como el pilar en volumen (10.221 toneladas anuales en promedio), mientras la madera aserrada conserva mercados clave como China e Israel.

Créditos y subsidios para el sector forestal

El BID Invest aprobó un crédito de US 165 millones para la planta de celulosa Paracel, proyecto que cataliza la expansión de parte fundamental de la cadena de inversión forestal. Empresas finlandesas y la Universidad HAMK evalúan agendas de inversión y formación técnica. Delegaciones del Emachu Group de capital japonés exploran al país como proveedor de materiales de construcción.

El Estado también subsidia al sector. El MIC y la firma H. Petersen inauguraron un centro de entrenamiento con simuladores de maquinaria forestal de última generación para jóvenes. La Facultad de Ciencias Agrarias (UNA) celebró la XI Semana Forestal bajo el lema "Bosques y Economía", lanzando la Red Paraguaya de Restauración de Ecosistemas. Por su parte, el INFONA presentó los resultados de su tercer Inventario Forestal Nacional, una herramienta que aporta "transparencia y evidencia" para atraer inversiones verdes. De acuerdo al mismo, el 44,4% del territorio nacional cuenta con cobertura forestal (36% bosques nativos, 6% palmares y 0,8% plantaciones). Reportó el índice de deforestación más bajo de los últimos 20 años. En base a este documento, el Gobierno sostiene un discurso propagandístico en torno a que Paraguay posee el 100% de energía eléctrica renovable y más del 40% de cobertura boscosa, lo que reduce la "huella de carbono" nacional y aumenta el valor de sus certificados. Con ello, la narrativa oficial y empresarial ha pasado de ver la sostenibilidad como un "costo" a tratarla como un "activo financiero" y una herramienta de competitividad en el mercado global.

Al mismo tiempo, el Inventario Forestal Nacional 2026 registró 256 especies de árboles en seis estratos forestales, posicionando a Paraguay como un país con información estratégica para el arribo de créditos de carbono. De hecho, el bosque sub húmedo inundable del río Paraguay se identificó como el mayor sumidero de carbono, con 146 toneladas por hectárea.

Fepama destacó que la sostenibilidad ya no es un costo, sino un activo financiero. Se busca monetizar servicios ambientales y certificar bosques para acceder a créditos de carbono. Ante las exigencias del acuerdo Mercosur-UE, el sector sostiene que la producción basada en reforestación legal y certificada convierte a Europa en un "aliado estratégico" en lugar de una barrera comercial.

Mercados de carbono

Cuatro empresas fundaron la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono (CAPADECOC) el 10 de marzo de 2026, bajo la presidencia de Kiantar Betancourt, CEO de Atenil. **CAPADECOC busca articular al sector privado con el Estado para establecer estándares internacionales y atraer inversiones.** El acta fundacional se firmó en la Unión Industrial del Paraguay (UIP), ya que este sector pretende darle un carácter industrial y comercial al activo financiero, es decir, la financiarización de la naturaleza. Se proyecta que Paraguay podría generar entre USD 3.000 y USD 5.000 millones mediante la comercialización de hasta 150 millones de toneladas de carbono en los próximos años. La consolidación de la **Ley de Créditos de Carbono** (una de las prioridades del actual gobierno) es el cimiento que permite la seguridad jurídica para inversores extranjeros, como los grupos finlandeses y japoneses que ya exploran el sector forestal como sumidero de carbono. Esto se buscó consolidar a partir de la realización del Paraguay Carbon Forum 2026. El mismo se realizó entre el 25 y 26 de marzo, y funcionó como la plataforma de lanzamiento internacional del país como "hub" regional en actividades vinculadas a las plantaciones forestales, la mercantilización de los bosques, rubros del agronegocio, y la energía.

En este espacio, el presidente Santiago Peña inauguró el foro, afirmando que el país no debe elegir entre desarrollo y sostenibilidad. El MADES resaltó la implementación de una plataforma digital para inversiones, orientada a implementar estos proyectos a partir de la institucionalización de los procesos de registro y monitoreo de los créditos.

Minerales críticos en foco de organismos financieros internacionales

Se observa que los organismos financieros multilaterales (especialmente el FMI y el BID) han puesto la mirada estratégica hacia la explotación de minerales críticos en América Latina.

El **documento de la estrategia** fue presentado durante las Reuniones Anuales de 2026 en Paraguay. La narrativa de “minerales críticos” está fusionando la agenda de sostenibilidad ambiental con la seguridad nacional de las potencias occidentales. El Grupo BID lanzó formalmente IDB LAC Mineral, en el cual este organismo se posiciona como catalizador de inversión privada, proporcionando asistencia técnica para reformas regulatorias y financiamiento mixto (público-privado) para infraestructura. La iniciativa busca alinear la oferta regional con la demanda de largo plazo de socios como EE. UU., Europa, Japón y Corea del Sur, quienes buscan reducir su dependencia de proveedores actuales (especialmente China). En el mismo sentido, el discurso de Nigel Clarke, representante del FMI, redefine la posición de América Latina como proveedora de estas materias primas. El desarrollo de esta actividad extractivista implica una transformación física del territorio para sostener la expansión productiva.

La disputa por la energía

Otro de los elementos centrales del modelo extractivista está vinculado con la energía, en un contexto marcado a nivel local por la renegociación del Anexo C del Acuerdo de Itaipú en un escenario global de crisis energética que configura los términos de la presente transición energética que conlleva importantes disputas geopolíticas.

Agrocombustibles retoman fuerza

Los agrocombustibles se posicionan en una fase de expansión estratégica, impulsada por la volatilidad de los precios del petróleo. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados sancionó modificaciones clave a la Ley N° 6389/19, que regula la promoción del biodiésel. Este cambio normativo busca blindar los costos del agro. Con esta modificación se reemplaza el incremento gradual del 1% anual por un rango fijo de mezcla obligatoria de entre el 5% y el 20% para motores diésel. Además, se extienden los beneficios impositivos (IVA y aranceles a la importación de bienes de capital) a la exportación. Este proceso forma parte de una noción conocida como “bioeconomía”, la cual es impulsada por diferentes organismos, entre los que se destaca el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el cual promueve este tipo de actividades extractivistas como modelo donde América Latina puede liderar la transformación de materias primas (soja, maíz, caña de azúcar) en energía. Es decir, el acaparamiento de la tierra con fines energéticos. El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la UIP destaca que Paraguay tiene un potencial de crecimiento masivo en este rubro.

El análisis de los diversos rubros extractivistas durante marzo-abril visibiliza la dinámicas políticas e internacionales, financieras y técnicas que permite la territorialización del capital extractivo bajo etiquetas supuestamente sostenibles como las vinculadas a la “bioeconomía” o a la “agricultura regenerativa”, que busca asegurar la rentabilidad corporativa a costa de la vida de las comunidades.

ACUERDO UE-MERCOSUR

Tras ser ratificado por los parlamentos de los cuatro países miembros entre febrero y marzo, el pilar comercial del Acuerdo UE-Mercosur entró en vigor provisionalmente el 1 de mayo de 2026. De hecho, el acuerdo entre la Comisión Europea y los países del Mercosur, tras la firma en Asunción el 17 de enero, fue que los parlamentos locales lo ratificaran de manera acelerada (fast track). En el caso paraguayo, el Congreso dio luz verde al tratado a mediados de marzo (Senado el 4 y Diputados el 17), con lo cual el presidente Santiago Peña promulgó la ley de ratificación el 30 de marzo. Tal como se mencionó en el dossier anterior, la entrada en vigor parcial responde a una estrategia institucional de la Unión Europea. Esto responde a que el Parlamento Europeo envió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que podría contravenir tratados constitutivos, y ante la previsión de que el tribunal podría tardar entre uno y dos años en pronunciarse, se optó por esta vía, la cual fue denunciada como antidemocrática por más de 100 organizaciones europeas.

Esta aprobación permite una reducción gradual de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea. En concreto, la desgravación arancelaria se ha negociado en plazos de 4, 7, 12 y hasta 30 años. Los plazos más cortos (4 años) se aplican a bienes con poca manufactura o materias primas, donde la región tiene lo que se denomina como “ventajas comparativas”, un eufemismo para dar cuenta del intercambio de “vacas por autos”. Mientras tanto, los plazos de hasta 30 años se reservan para sectores que requieren protección estatal para desarrollarse antes de competir plenamente en una economía liberalizada

Este proceso reconfigura las tensiones existentes previamente, mediante la inclusión de salvaguardas. Estas establecen límites a las cantidades de importación y exigen que ningún producto del Mercosur incumpla los estándares medioambientales que los europeos exigen a sus propios productores.

De acuerdo al politólogo uruguayo Damián Rodríguez Díaz, el destrabe de estas negociaciones y rápida aprobación responde al contexto geopolítico marcado por la agudización de la agresión imperialista de Estados Unidos, a partir de la puesta en marcha de conflictos bélicos. Es decir, el ‘factor Trump’ funcionó como un catalizador para el cierre de las negociaciones. De acuerdo a este investigador, ambas partes necesitaban ese gesto simbólico. Por tanto, el componente geopolítico explica, en gran medida, la culminación del acuerdo.

La posición de Europa frente a esta situación no es uniforme, pero las bases militares repartidas masivamente en su territorio han sido puntos estratégicos para los bombardeos estadounidenses en Irán. Además, sus presupuestos armamentísticos aumentan en la medida en que la noción de “seguridad nacional” toma un lugar central de la mano del crecimiento de la popularidad de la ultraderecha. Frente a ello, las medidas ambientales retroceden. Lula, presidente brasileño y líder del progresismo a nivel mundial, fue uno de los principales impulsores de esta aprobación. En sus últimas declaraciones alertó asimismo sobre la necesidad de inversión en defensa nacional.

Cabe destacar que Brasil ha logrado incluir cláusulas para proteger sectores estratégicos, como el de vehículos eléctricos, permitiendo una revisión si las importaciones europeas afectan el desarrollo de la industria nacional. Un ejemplo de esta estrategia es la gestión de Lula con la empresa china BYD, que se instaló en antiguas fábricas estadounidenses en Brasil. El gobierno brasileño condicionó la producción a modelos híbridos que utilizan etanol.

Pese a esta posición más favorable negociada por Lula, todas las evaluaciones han mostrado que los beneficios para el Mercosur están en el sector agroexportador, que emplea a poca gente y que deberá adaptarse a estándares europeos exigentes. Mientras tanto, el sector industrial será el más afectado por la liberalización.

Los gremios del agronegocio paraguayo, principales beneficiarios potenciales de este proceso, mantienen una postura ambivalente. Si bien celebran la apertura de nuevos canales comerciales con el mercado europeo, manifiestan profundas reservas ante la aplicación de las salvaguardas ambientales de la UE.

La implementación del Reglamento 1115 sobre productos libres de deforestación es el principal foco de fricción, así como la incorporación de las salvaguardas ambientales. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), cuestiona la imposición de estas normativas por considerarlas “salvaguardas unilaterales” que afectan la producción local. Hugo Pastore, director de CAPECO, advierte que la exigencia europea de “segregación física” de los granos es prácticamente imposible de cumplir. El sistema logístico global y nacional opera mediante la mezcla de productos en silos, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad individualizada bajo los estándares actuales.

El sector rechaza la decisión de la UE de retirar al aceite de soja la categoría de biocombustible sostenible. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) creó una plataforma para atraer y acompañar inversiones extranjeras, buscando conectar a inversores con el potencial exportador del país bajo el nuevo marco del acuerdo.

Es importante subrayar que la urgencia europea por asegurar suministros de materias primas críticas ha sido uno de los catalizadores de la firma de este Acuerdo. La UE requiere 35 tipos de materiales críticos para su infraestructura de “desarrollo sostenible”, de los cuales 24 se producen en América Latina. En este escenario, la región es vista como proveedora de insumos básicos para la llamada “descarbonización” del Norte Global, en una disputa geopolítica donde la UE busca disputar el terreno frente a China y Estados Unidos. De hecho, el Acuerdo actúa en sinergia con la iniciativa Global Gateway de la UE, la cual se presenta como una herramienta geoeconómica para contrarrestar la influencia china en infraestructura. Sin embargo, esta voluntad de proyección de poder, se enfrenta a profundos retos normativos y prácticos, revelando la fragilidad de un modelo que intenta disfrazar de “sostenibilidad” lo que estructuralmente se revela como una nueva fase colonial. En tal sentido, la implementación del Acuerdo UE-Mercosur tendería a la consolidación del modelo sojero y ganadero, a partir de un revestimiento verde que facilita la penetración de capitales financieros en los bienes comunes.

SEMILLAS Y BIOTECNOLOGÍA

30 años del ingreso de soja transgénica a la Argentina

Marzo marcó el hito del ingreso de la soja transgénica a la Argentina en 1996, un proceso que acompañó su expansión ilegal hacia Paraguay y el resto de los países del Cono Sur.

En el país hoy suman más de 70 organismos transgénicos liberados.

Tres décadas después, el balance es inequívoco: las promesas de sostenibilidad han sido desmentidas. Tal como sostiene la investigadora Silvia Ribeiro, el uso de glifosato —cancerígeno según la OMS— se ha multiplicado por veinte, mientras la industria responde a la resistencia de las malezas “apilando” genes tolerantes a herbicidas aún más tóxicos, como el dicamba y el 2,4-D. El actual avance de la edición génica representa una renovación de riesgos para la biodiversidad, la salud humana y la soberanía alimentaria

Nuevos organismos liberados

A inicios de año se liberó un organismo más de soja transgénica, a través de la Resolución MAG N° 43/2026, de la empresa BASF Paraguay S.A. Además, se presentó una consulta previa para la liberación de un organismo de soja producido con Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT, por sus siglas en Inglés). Esta última es la denominación bajo la cual se introducen organismos de edición genómica en la institucionalidad paraguaya, en una profundización del control corporativo sobre la arquitectura misma de la naturaleza.

En paralelo, el INBIO —instituto tecnológico financiado por los principales gremios del agronegocio y transnacionales— profundiza su participación en la difusión de biotecnología transgénica en comunidades campesinas.

A través del Programa de Agricultura Sostenible con Biotecnología (PASB), se promueve el ensilaje de maíz y soja transgénica en comunidades como San Francisco (Coronel Bogado, Itapúa). Esta práctica busca transformar la matriz alimentaria del ganado menor en fincas campesinas, integrándolas a las dinámicas del agronegocio.

Incorporación de IA a la biotecnología

La feria INNOVAR 2026 fue el escenario donde Agrotec presentó su nueva línea de bioinsumos, incluyendo fungicidas (Bio-amyl, Bio-guard), insecticidas (Natural Bio-bass SC) y el fijador de nitrógeno foliar Utrisha N de la corporación Corteva (fusión de Dow y DuPont). Las cepas de estos microorganismos son identificadas y privatizadas mediante la tecnología de Lavie Bio, subsidiaria de la firma israelí Evogene. El método consiste en la aplicación de software y algoritmos predictivos que analizan el comportamiento de microbios y moléculas a escala masiva. Así, la “información predictiva” generada por la IA se convierte en el activo financiero: se patentan cepas y procesos biológicos que antes eran bienes comunes, bajo un modelo de extractivismo digital y biopiratería.

Agrotec, parte del grupo de capital brasilero Agrihold, anunció la adquisición de una participación accionaria en la brasileña Agrivalle, es propietaria de uno de los mayores bancos genéticos privados de microorganismos de América Latina. Busca expandir el mercado de bioinsumos en Paraguay con una proyección de crecimiento del 15% para este año. Esta dinámica forma parte del discurso de la “Agricultura Regenerativa” y la “Bioeconomía”, filtrándose a través de las regulaciones ambientales que configuran el comercio internacional - especialmente con la Unión Europea -, mientras avanza el control tecnológico y financiero sobre monocultivos a gran escala.

Integración regional de biotecnologías

Bolivia autorizó en marzo el uso de la soja HB4 durante la Exposoya 2026, mientras tanto, Paraguay se integró a la Red Regional de Evaluación de Cultivares de Soja (RREC-SO-Américas). Coordinada por el INTA - Argentina y con el soporte técnico de la Universidad de Florida, esta red busca unificar protocolos de la producción en los países de la región a partir de modelos de simulación y análisis de datos. Financiada por FONTAGRO y el BID, la red institucionaliza el análisis sistemático de datos estratégicos hacia las semilleras y asesores técnicos, centralizando la toma de decisiones agronómicas en modelos predictivos.



Publicidad de lavie bio.

ANEXO DE NOTICIAS

Podés descargar todas las noticias de nuestra base de datos en el siguiente enlace:



[DESCARGAR](#)



